

Como era previsible, en los últimos tiempos asistimos en educación al auge de los aires neoliberales que elogian la bondad del mercado y la libertad de elección de centro educativo a la vez que enarbolan el sofisma de la **calidad total** de la enseñanza. En nombre de la **libre competencia** en el mercado escolar (a imagen y semejanza de la libre competencia de las empresas en el mercado económico) se están poniendo en marcha, sin prisa pero sin pausa, una serie de medidas orientadas a apoyar a la enseñanza privada en detrimento de un mayor compromiso con la escuela pública. La educación pasa así a convertirse cada vez más en una mercancía sometida a las leyes de la oferta y de la demanda en detrimento de su valor como derecho de todos. La transferencia al escenario educativo de la máxima postmoderna de que uno es lo que uno puede comprar corre el riesgo, bajo esta lógica de **servicio al cliente**, de trasladar a la educación lo que caracteriza fundamentalmente a los clientes: la desigualdad. El eufemismo con el que se expresaba la ministra de Educación y Cultura hace unos meses ("He recibido un sistema que tiene un 31% de centros de titularidad privada y un 69% de titularidad pública. Mi intención es que esta situación **evolucione** conforme a las demandas sociales") confirmaba los peores augurios: corren malos tiempos para la educación pública.

Pese a la lentitud y a la ocultación con que a menudo se están haciendo las cosas en educación, los indicios de este auge neoliberal son demasiado obvios como para ser ignorados: aumenta el dinero público para subvencionar a los centros privados de educación infantil y primaria mientras se devalúan los programas de educación compensatoria, se eliminan centros de innovación pedagógica, disminuyen los especialistas y el personal de apoyo a los centros, aumenta la ratio en las aulas y empeoran las condiciones de trabajo de los enseñantes de la escuela pública. La educación secundaria obligatoria asiste a una lenta pero terca voluntad de acentuar su dimensión selectiva y se vacían de contenido los aspectos más progresistas de la LOGSE (una ley, por cierto, votada por todos menos por el Partido Popular) mientras el desmantelamiento de los aspectos más comprensivos del currículo parece ser uno de los objetivos de las **comisiones de expertos** constituidas por el Ministerio de Educación y Cultura al calor de las presiones de algunos sectores confesionales y corporativos.

Finalmente el decreto de libertad de (s)elección de centro que regula la admisión del alumnado va a consagrarse en bastantes casos una jerarquía de centros escolares en la que algunos centros privados confirmarán su tendencia a acoger a esos alumnos que, por su origen socioeconómico, tienen bastante más fácil el acceso al éxito escolar y a la promoción social. De esta manera, se justifican ciertos discursos sobre la calidad en educación que ponen el acento en la homogeneización de la población que escolarizan y no en la innovación didáctica y en la atención educativa a la diversidad personal y social del alumnado.

Es cierto que algunas de estas políticas tenían su antecedente inmediato en las políticas de la última época de la Administración socialista. También lo es que otras comunidades de diferente signo político y con competencias plenas en educación están cayendo en semejantes tentaciones neoliberales y muestran cierta desconfianza ante las posibilidades de mejora de la enseñanza pública. Sin embargo, a quienes hemos ejercido el derecho a la crítica en el pasado con los unos no nos consuela certificar hoy el empeoramiento de la situación con los otros.

En este contexto, no deja de ser significativa la ausencia de ideas y de proyectos referidos a la formación continua del profesorado. Quienes en su programa electoral proclamaban a los cuatro vientos el desmantelamiento de los Centros de Profesores han optado ahora por someter a estas instituciones a una lenta agonía. A la sensible reducción del número de asesores de formación se une una sensación de incertidumbre en la que nada se sabe (o al menos nada se dice) sobre el futuro de estas instituciones que surgieron -conviene recordarlo porque la memoria es frágil- en medio del creciente des prestigio y escaso empuje innovador de los ICEs y del alejamiento de la mayoría de las escuelas y facultades universitarias del mundo real de la enseñanza primaria y secundaria.

Es verdad que el creciente **valor de cambio** de la formación continua y algunas prácticas de formación y asesoramiento, junto a la resistencia a los cambios educativos del sector más conservador de la enseñanza, han proyectado sobre los Centros de Profesores algunas sombras de duda y bastantes estereotipos. Pese a ello, el fomento de la reflexión sobre lo que se hace en las aulas y el ejercicio del pensamiento crítico entre los enseñantes siguen justificando la existencia de los Centros de Profesores. Aunque a algunos no les gusten y sigan a la búsqueda de la cuadratura del círculo.